

“LAS INFRAESTRUCTURAS SE CONVIERTEN EN OTRA VÍCTIMA DE LA CICATERA POLÍTICA DEL PP”

La inversión en infraestructuras sufrirá el mayor desplome el próximo año, cuando caerá un 22%

Durante esta semana se han presentado las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Una vez más, la derecha española continúa obcecada en su objetivo de reducción del déficit y presenta unos presupuestos que no hacen más que ahondar en el desastre. Una de las partidas que más afectada se ha visto es la destinada a las infraestructuras del transporte sin que, para justificarlo, se hayan dado más explicaciones que las que ofreció, ante el Congreso de los Diputados, la Ministra Ana Pastor.

Así, el pasado miércoles 26 de septiembre, la Ministra de Fomento compareció ante el Congreso para presentar los aspectos más destacados del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI). Dicho plan se convertirá en el principal instrumento de planificación de estas materias en un amplio horizonte temporal que finalizará en 2024.

Desgraciadamente, de la comparecencia de la Ministra hay más sombras que luces que reseñar. Según sus propias declaraciones, el PITVI va a ser la principal contribución del Ministerio de Fomento al conjunto de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno.

Con una breve observación a los datos presentados podemos asegurar que, efectivamente, este Plan encaja, a la perfección, con la política cicatera y tacaña del actual Gobierno del Estado, la cual, irremediablemente, nos está condenando a un nuevo y más profundo periodo de recesión económica.

La tijera de Rajoy ha alcanzado ya a las infraestructuras del transporte haciendo que el presupuesto destinado a esta materia pase del exiguo 1,35% el pasado año al 0,95% del Producto Interior Bruto (PIB) durante los dos próximos. Eso conllevaría un descenso de la inversión, para 2013, de más de un 22% reduciéndola a apenas 10.500 millones de euros. A su vez, el Plan prevé que, a lo largo de su amplio horizonte temporal (hasta 2024), el porcentaje del presupuesto asignado a las infraestructuras pueda descender hasta un 0,89% del PIB estatal.

Otra cuestión que no dejó clara la Ministra durante su intervención, a pesar de los numerosos requerimientos de los demás grupos parlamentarios, fue la cuantía global estimada para la inversión en infraestructuras, así como el reparto en anualidades de la misma.

Si tiramos un poco de hemeroteca podremos recordar que, el pasado febrero, el Gobierno estableció, para este Plan, una inversión total de 225.000 millones de euros. Si aplicamos los anunciados porcentajes, por debajo del 1% del PIB, a cada uno de los años de vigencia del Plan nos resultaría un montante total de apenas 110.000 millones de euros. Tampoco a esta importante brecha supo responder la señora Ministra.

El Ejecutivo parece confiar ciegamente en la participación del capital privado en la financiación del Plan. Para ello incorpora nuevos programas de colaboración público-privada que tienen como objetivo incrementar, en más de 6 puntos porcentuales (del 10% actual al 16%), la parte presupuestaria del Plan que soportaría la inversión privada. Una vez más, la Ministra tampoco dio ningún tipo de detalle sobre como se llevaría a cabo estas líneas de colaboración ni, menos aún, que pretende hacer el Gobierno para que las empresas puedan superar los actuales problemas de acceso a financiación y, de esta forma, poder acometer estos costosos proyectos de infraestructuras.

Más preocupante fue otra parte de la comparecencia parlamentaria en la que la titular del Ministerio de Fomento dejó claro, utilizando palabras textuales, que esperan contar con “las aportaciones de usuarios y beneficiarios”. Aunque tampoco lo quiso aclarar, este tipo de afirmaciones sólo puede conllevar nuevos y más caros peajes que tendremos que soportar los usuarios de las infraestructuras, es decir, un coste más para unas economías domésticas muy dañadas ya por la actual crisis económica y por la pésima gestión del Gobierno.

Una vez más, la derecha española vuelve a mentir. Nos engaña al aplicar recortes en infraestructuras que no estaban contemplados en su programa electoral, aquel que elaboraron con la “varita mágica” que les permitiría tener dinero para todo ya que, al día siguiente de la investidura de Rajoy, la confianza en la economía española se incrementaría tanto que nos haría superar la crisis.

Pero también nos continúa mintiendo día tras día, por ejemplo, al manifestar que para ellos la inversión pública en infraestructuras es una prioridad de gasto público. ¿Desde cuándo se llevan a cabo recortes presupuestarios en las partidas que se consideran prioritarias?, ¿si durante la anterior década, con gobiernos de los “dos colores”, la inversión en infraestructuras siempre superó el 2% del PIB (por encima del 4% incluso durante los años de mayor crecimiento económico), por qué ahora quieren situar esta partida de inversión por debajo del 1%?

La respuesta a estas preguntas es más que evidente. El PITVI no es más que un nuevo instrumento de recortes al servicio de la tacaña política económica procíclica que está llevando a cabo el Partido Popular. Este recorte de la inversión no hará más que continuar profundizando la desastrosa gestión del Ejecutivo, provocando más recesión, más paro y ahondando, más aún si cabe, en una política errónea, insolidaria e injusta.

Contar con una red de infraestructuras básicas de transporte modernas y de calidad siempre ha sido un elemento fundamental de estímulo para el crecimiento económico y para la cohesión social y territorial. Desde nuestro Sindicato estamos convencidos de ello y por eso, instamos al Gobierno a que dé marcha atrás con este nuevo recorte presupuestario que no va a conllevar más que un nuevo empobrecimiento de los ciudadanos.

La derecha española tiene que entender, de una vez por todas, que la “tijera” no es el instrumento para hacer políticas anticrisis. Exigimos al Gobierno que cambie de rumbo y que apueste ya por la creación de empleo, por ejemplo, a través de la construcción y mejora de nuestras infraestructuras, para de esta forma reactivar la economía, mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos y, a su vez, avanzar en términos de cohesión social y territorial.